



Sentencia Tutela  
Radicación: 11-001-40-88-038-2021-035 00  
ACCIONANTE: PAULA ANDREA MORALES GONZALEZ  
ACCIONADO: SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTA  
Derechos Fundamentales: Petición.

Bogotá DC., Veintiuno (21) de febrero de dos mil veintiuno (2021).-

### 1. OBJETO DE LA DECISIÓN.-

Procede el Despacho a proferir fallo acorde a derecho dentro de la acción de tutela instaurada por la señora **PAULA ANDREA MORALES GONZALEZ** en contra de la **SECRETARIA DE MOVILIDAD DE DISTRITAL DE BOGOTÁ**, por la presunta vulneración los derechos fundamentales de petición, habeas data, buen nombre y trabajo.

### 2. HECHOS QUE MOTIVAN LA ACCIÓN.-

La señora PAULA ANDREA MORALES GONZALEZ, presenta demanda de acción de tutela contra la SECRETARIA DE MOVILIDAD DE DISTRITAL DE BOGOTÁ, en razón a que presentó derecho de petición solicitando el descargue de los comparendos compulsados a través de los sistemas de foto detección - foto multas o sistema de ayudas tecnológicas, por la Secretaría Distrital de Movilidad debido a que no le fueron notificados y que son los siguientes:

11001000000027533956	30-07-2020
11001000000027532124	23-07-2020
11001000000016129557	05-09-2017
11001000000025044367	25-09-2019
11001000000021452104	31-10-2018
11001000000016071140	03-05-2017

Manifiesta que el derecho de petición fue radicado con el número 2565462020 de fecha 23 de septiembre de 2020 y que a la fecha no ha recibido respuesta.

Solicita se ordene a la SECRETARIA DE MOVILIDAD DE DISTRITAL DE BOGOTÁ dar respuesta al derecho de petición radicado con el número 2565462020 de fecha 23 de septiembre de 2020 y se ordene dar cumplimiento a lo solicitado por el derecho al Habeas Data, el buen nombre y el derecho al trabajo.

Como pruebas allegó las siguientes:

- Copia de derecho de petición fue radicado con el número 2565462020 de fecha 23 de septiembre de 2020



Sentencia Tutela  
Radicación: 11-001-40-88-038-2021-035 00  
ACCIONANTE: PAULA ANDREA MORALES GONZALEZ  
ACCIONADO: SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTA  
Derechos Fundamentales: Petición.

### 3. ACTUACIÓN PROCESAL.-

A fin de verificar si existe amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados por la señora PAULA ANDREA MORALES GONZALEZ, éste despacho encontró procedente ordenar el traslado de la demanda a la entidad accionada, a fin de notificarle de la misma y para que dentro del término de dos (2) días rindiera las explicaciones que considerara, anexando la prueba documental correspondiente, permitiéndole así ejercer su legítimo derecho de defensa y contradicción.

**3.1.** La **SECRETARIA DE MOVILIDAD DE DISTRITAL DE BOGOTÁ**, a través de MARIA ISABEL HERNANDEZ PABÓN, en condición de Directora de Representación Judicial de La Secretaria Distrital De La Movilidad, señala que, se evidencia que la presente solicitud de amparo no cumple con los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, declarando la existencia de otros recursos judiciales adecuados y efectivos para la protección de los derechos fundamentales, que se alegan comprometidos.

Así mismo manifiesta que, se evidencia en los procesos contravencionales como de cobro coactivo, la parte accionante recibió personalmente las órdenes de comparendo con base en las cuales eleva su solicitud de amparo y por tanto sabía que serían adelantados los respectivos procedimientos en su contra, en los que podría ser declarada infractora y por ende sancionada con la imposición de una multa, la cual debería cancelar, pues de lo contrario sería cobrada mediante el respectivo proceso de cobro coactivo

Añade que, en el presente caso la acción de tutela no puede ser invocada como mecanismo transitorio de protección de derechos fundamentales dado que no se evidencia la conformación de un inminente perjuicio irremediable, debido a que la Doctrina constitucional ha descartado que la imposición de una multa o la restricción para renovar la licencia de conducción por sí misma lo configure, y porque de igual manera la parte accionante no demostró la urgencia, la gravedad, la inminencia y la impostergabilidad para utilizar este medio constitucional.

Continuando con su exposición, precisa que la Secretaría ha respetado los derechos de la accionante, y que según el informe allegado a la Dirección de Representación judicial por parte de la Subdirección de Contravenciones, en calidad de área encargada de dar la respuesta, se dio contestación a los hechos y pretensiones contenidos en el escrito de Tutela a través del radicado 20214210707651 del 11 de febrero de 2021.



Martha Cecilia Vega Benavides <mcvega@movilidadbogota.gov.co>

#### Notificación Radicado 2565462020

1 mensaje

Martha Cecilia Vega Benavides <mcvega@movilidadbogota.gov.co>  
Para: autosynegociosovale@gmail.com

11 de febrero de 2021, 16:30

Buena tarde Sra. Paula Andrea Morales, de manera atenta me permito notificarla del radicado de la referencia.

Atentamente,

Martha Vega B.  
SDM.

Copia del oficio 20214210707651.pdf  
641K



Sentencia Tutela  
Radicación: 11-001-40-88-038-2021-035 00  
ACCIONANTE: PAULA ANDREA MORALES GONZALEZ  
ACCIONADO: SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ  
Derechos Fundamentales: Petición.

Del mismo modo considera improcedente la acción de tutela para discutir las actuaciones contravencionales por infracciones a las normas de tránsito, pues el mecanismo de protección frente a estos derechos corresponde a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, lo cual sustenta en pronunciamientos de la Corte Constitucional T-115 de 2004, cuando versa sobre la revisión del procedimiento contravencional que la autoridad de tránsito adelanta por infracciones a las normas previstas en el Código Nacional de Tránsito, como también al no agotarse los requisitos de residualidad de la acción de tutela, así como la obligatoriedad del precedente, el cumplimiento de la inmediatez, y de acudir a la respectiva Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para resolver sus pretensiones.

Manifiesta que la acción de tutela no es un instrumento procesal apto y para alcanzar los propósitos planteados por los peticionarios en cuanto al derecho al debido proceso se refiere, máxime cuando no se vislumbra la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable, que haga factible la acción de tutela como mecanismo transitorio, toda vez que la multa impuesta no puede considerarse en sí misma un perjuicio irremediable, y teniendo en cuenta que al demandarse la nulidad de un acto administrativo se cuenta con la posibilidad de solicitar su suspensión provisional, medida cautelar que hace perder al acto su fuerza ejecutoria mientras se decide de fondo sobre su legalidad.

Se solicita también, se tenga como precedente las sentencias de la Corte Constitucional Sentencia T-988/02 y Sentencia T-146/12, ya que, se resolvió lo solicitado, frente a la petición, lo que significa que se esta frente a un hecho superado, el cual, acorde con lo adocinado por el máximo juez de tutela, constituye motivo suficiente para negar el amparo solicitado.

ANEXA: Copia del oficio radicado 20214210707651 del 11 de febrero de 2021 y su envío al correo electrónico, y documentos de representación judicial.

**3.3.** Durante el término de traslado, la **CONCESION RUNT S.A.** a través de la doctora PATRICIA TRONCOSO AYALDE, en calidad de Gerente Jurídica, frente a los hechos objeto de la acción de tutela manifestó que no le constan.

Que atendiendo la ejecución del contrato de Concesión 033, no se constituye en autoridad de tránsito, sino la de ser un mero repositorio de información reportada por varios actores, entre ellos, los organismos de tránsito, por tanto, no tiene competencia para eliminar o modificar la información de comparendos, o declarar la prescripción, o realizar acuerdos de pago, o realizar las notificaciones, por ser ello exclusivo de las autoridades de tránsito.

Por lo anterior, no es responsable de la supuesta vulneración de los derechos fundamentales del accionante con relación a la información de multas e infracciones de tránsito por tratarse de un tema de exclusivo conocimiento de los organismos de tránsito. Concluye que el objeto de la presente acción de tutela, no son competencia de esa entidad y haciendo imposible haber vulnerado los derechos fundamentales del accionante.

#### **4. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO.-**

##### **4.1. Procedencia de la Tutela.-**



Sentencia Tutela  
Radicación: 11-001-40-88-038-2021-035 00  
ACCIONANTE: PAULA ANDREA MORALES GONZALEZ  
ACCIONADO: SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ  
Derechos Fundamentales: Petición.

Dispone el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el numeral 2º del artículo 42 de la misma norma, que la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades que hayan vulnerado, afecten, o amenacen vulnerar cualquiera de los derechos fundamentales, e igualmente, contra las acciones u omisiones de los particulares encargados de la prestación del servicio público.

Y a su turno el artículo 86 de la Constitución Política que establece la acción de tutela, prevé que toda persona podrá reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados y amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad.

Igualmente, que “La ley establece los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”.

En este caso, se instauró acción de tutela contra la **SECRETARIA DE MOVILIDAD DE DISTRITAL DE BOGOTÁ**, entidad pública del orden municipal.

#### **4.2. De la Competencia.-**

De conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1983 de 2017, a los Jueces Municipales, les serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad pública del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares.

En consecuencia, éste despacho es competente para conocer de la presente acción de tutela, por haber sido instaurada contra una entidad pública del orden municipal.

#### **4.3. Legitimación en la causa por activa y pasiva.-**

En la tutela de la referencia los requisitos en mención se cumplen cabalmente, puesto que la acción de tutela fue interpuesta por el señor PAULA ANDREA MORALES GONZALEZ, para solicitar la protección de sus derechos fundamentales de petición, habeas data, buen nombre y trabajo.

Por su parte, la acción de amparo se dirigió contra la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ; por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de petición, habeas data, buen nombre y trabajo.

#### **4.4. Problema Jurídico.-**

Conforme a la petición de tutela objeto de este pronunciamiento, se trata de establecer si la **SECRETARIA DE MOVILIDAD DE DISTRITAL DE BOGOTÁ**, vulneran los derechos fundamentales del accionante, al no responder el derecho de petición que solicita el descargue de comparendos por foto multas.

#### **4.5. De los derechos fundamentales.-**



Sentencia Tutela  
Radicación: 11-001-40-88-038-2021-035 00  
ACCIONANTE: PAULA ANDREA MORALES GONZALEZ  
ACCIONADO: SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTA  
Derechos Fundamentales: Petición.

#### 4.5.1. Del derecho de petición:

La Corte Constitucional en copiosa jurisprudencia ha señalado que el derecho de petición ostenta la calidad de fundamental, por lo que el mecanismo idóneo de protección cuando resulta amenazado o vulnerado por la omisión de cualquier autoridad pública o privada es la acción de tutela. Este derecho otorga la facultad, a cualquier persona, de formular solicitudes respetuosas e implica también, el poder exigir una respuesta oportuna y de fondo acerca de lo pretendido.

Así mismo, se ha indicado que el núcleo esencial del derecho de petición, está compuesto por las siguientes características<sup>1</sup>:

*(i) la posibilidad cierta y efectiva de presentar, de manera respetuosa, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la facultad de obtener una respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos previstos en el ordenamiento jurídico; (iii) el derecho a recibir una respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad analice la materia propia de la solicitud y se pronuncie sobre la totalidad de los asuntos planteados, es decir, la correspondencia entre la petición y la respuesta, excluyendo fórmulas evasivas o elusivas y; (iv) la pronta comunicación al peticionario sobre la determinación adoptada, con independencia de que su contenido sea favorable o desfavorable<sup>2</sup>.*

Ahora bien, el art. 14 de la Ley 1755 de 2015 establece que las peticiones en general se resolverán dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción, en tanto que las solicitudes de documentos y de información se decidirán dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de su recibo, mientras que las relacionadas con consultas se resolverán dentro de los 30 días siguientes.

Se concluye entonces, que cualquier desconocimiento de los términos legales y jurisprudenciales sobre las respuestas a las peticiones, implica la vulneración de dicha prerrogativa fundamental, siendo como ya se dijo, la acción de tutela el mecanismo idóneo para protegerlo.

**4.5.1.1** El artículo 29 de la Constitución Política, manifiesta que esta actuación se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, *“en materia de tránsito, el derecho administrativo sancionador es aplicado desde su óptica correctiva, para que los particulares se abstengan de incurrir en las conductas que les están proscritas de acuerdo al Código Nacional de Tránsito y, en caso de hacerlo, se pretende que la administración esté facultada para imponer y hacer cumplir las sanciones a que haya lugar.”*<sup>3</sup>

Frente a los aspectos fundamentales a tener en cuenta, para el debido ejercicio de la acción de tutela, en tratándose de procesos contravencionales por infracciones de tránsito, y de cara al problema jurídico planteado, se advierte que tiene eficacia ante el cumplimiento de los presupuestos inmediatos, urgentes de causarse un perjuicio irremediable, que ostente el carácter subsidiario, es decir que no se cuente con otros mecanismos de defensa judicial, o que los existentes no sean idóneos y adecuados para la

<sup>1</sup> Ver entre otras las Sentencias T-147 de 2006 (MP. Manuel José Cepeda Vargas), T-012 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda Vargas), T-1204 de 2004 (MP. Álvaro Tafur Galvis), T-364 de 2004 (MP. Eduardo Montealegre Lynett)

<sup>2</sup> Sentencia T-350 mayo 5 de 2006 M.P. Jaime Córdoba Triviño

<sup>3</sup> Sentencia T-051/16



Sentencia Tutela  
Radicación: 11-001-40-88-038-2021-035 00  
ACCIONANTE: PAULA ANDREA MORALES GONZALEZ  
ACCIONADO: SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTA  
Derechos Fundamentales: Petición.

debida protección de los derechos invocados, de lo contrario, en caso de no concurrir alguno de los citados aspectos, el amparo por vía excepcional es improcedente.

Veamos cómo a través de la interpretación constitucional, se ha clarificado la improcedencia de la acción de tutela ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial, entre ellas, el criterio de autoridad en sentencia T-087 de 2006, M. P. Clara Inés Vargas Hernández, en los siguientes términos:

*“Así las cosas la Corte ha de insistir en que ‘el primer llamado a proteger los derechos constitucionales no es el juez de tutela, sino el ordinario. La tutela está reservada para enfrentar la absoluta inoperancia de los distintos mecanismos dispuestos para la protección de los derechos de las personas, no para suplirlos. De otra manera tendría que aceptarse que, más temprano que tarde, la acción de tutela perdería completamente su eficacia’. Es necesario en efecto evitar así darle a la acción de tutela ‘un enfoque y alcance equivocados, particularmente en lo que tiene que ver con los criterios jurídicos de procedibilidad, los cuales atendiendo a lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política y 6º del Decreto 2591 de 1991, determinan el carácter eminentemente subsidiario de este mecanismo de defensa judicial’.* (Subraya la Sala).”

Medios de defensa que resultan idóneos, como así lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional:

*“En términos normativos y de la jurisprudencia, la acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones creadas por actos u omisiones que impliquen vulneración o amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces, para lograr la protección del derecho presuntamente amenazado.*

*“Tal como lo reconoció el juez de primera instancia, en el presente asunto nos encontramos frente a unos actos administrativos, amparados por la presunción de legalidad y al existir desacuerdo con los mismos, la preceptiva contenciosa vigente tiene previsto los mecanismos y los jueces competentes para que tales actos, si así se ameritare, sean retirados del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, si la legalidad de los actos acusados no ha sido cuestionada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no es la tutela el medio establecido para reclamar pretensiones que contra tal normatividad pudieren surgir.*

*“De otro lado, en el presente asunto no se configura el perjuicio irremediable, porque de promoverse la correspondiente acción ante la jurisdicción contencioso administrativa, el peticionario podría obtener la suspensión provisional de los actos censurados sin perjuicio de la eventual nulidad. De tal forma, resulta improcedente conceder el amparo, al haberse podido acudir a otro mecanismo de defensa judicial considerado eficaz para reclamar ante la jurisdicción especializada, como lo ha reiterado esta corporación:*

*“... la suspensión provisional resulta ser un trámite pronto y por lo mismo no menos eficaz que la vía de la tutela, sin que sea dable compartir los criterios expuestos a lo largo del líbello, en el sentido de admitir la viabilidad de la tutela y su mayor eficacia, por razones de tiempo, frente a la demora de los procesos ordinarios, pues ello daría lugar a la extinción de estos, si se pudiese escoger alternativamente y por esa circunstancia, entre el juez de tutela y el juez ordinario para la definición*



Sentencia Tutela  
Radicación: 11-001-40-88-038-2021-035 00  
ACCIONANTE: PAULA ANDREA MORALES GONZALEZ  
ACCIONADO: SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTA  
Derechos Fundamentales: Petición.

*apremiante de los derechos reclamados, lo que desde luego desnaturaliza la verdadera finalidad constitucional encaminada a la protección de los mismos, previo el cumplimiento de los presupuestos requeridos.”<sup>4</sup>*

#### 4.5.2 Procedencia de la acción de tutela para la protección del derecho al habeas data:

Al respecto la Corte Constitucional, en Sentencia T-883 de 2013, señaló:

*“De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario de defensa judicial, cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales “cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública”<sup>5</sup>, o por los particulares en los casos previstos en la ley.*

*Según lo establece la disposición constitucional, esta acción tiene un carácter subsidiario y residual, por lo que ella solo procede cuando quiera que el afectado no tenga a su alcance otro medio de defensa judicial o cuando, existiendo ese otro medio, la tutela se ejerce como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio de carácter irremediable. Adicionalmente, y a partir de lo previsto en el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que ella también resulta procedente –esta vez, como mecanismo de protección definitivo– en aquellos casos en los que la herramienta judicial que prevé el ordenamiento se muestra como ineficaz para garantizar los derechos fundamentales del afectado.<sup>6</sup>*

*Pues bien, en referencia a los conflictos relacionados con el recaudo, administración y uso de la información personal, la Ley Estatutaria 1266 de 2008, “por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones”, consagra distintas herramientas a través de las cuales los titulares de la información<sup>7</sup> pueden efectuar consultas o reclamaciones por los datos que sobre ellos reposan en las bases de datos.*

**En ese sentido, la Ley Estatutaria prevé las siguientes alternativas:**

- (i) Formular derechos de petición al operador de la información<sup>8</sup> o a la entidad fuente de la misma<sup>9</sup>, a fin de acceder a los datos que han sido consignados o de solicitar que ellos sean corregidos o actualizados (artículo 16); (Negrilla del Despacho)**
- (ii) Presentar reclamaciones a la Superintendencia de Industria y Comercio o a la Superintendencia Financiera –según la naturaleza de la entidad vigilada–, para**

<sup>4</sup> Sentencia T-766/06

<sup>5</sup> Esta expresión está contenida en el artículo 86 de la Carta.

<sup>6</sup> Sobre este tema se pueden consultar, entre muchas otras, las Sentencias T-1109 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-484 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, y T-177 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.

<sup>7</sup> El artículo 3 de la Ley 1266 de 2008 define al Titular de la información como “la persona natural o jurídica a quien se refiere la información que reposa en un banco de datos y sujeto del derecho de hábeas data y demás derechos y garantías a que se refiere la presente ley”.

<sup>8</sup> En la Ley Estatutaria sobre el habeas data se define al Operador de información a “la persona, entidad u organización que recibe de la fuente datos personales sobre varios titulares de la información, los administra y los pone en conocimiento de los usuarios bajo los parámetros de la presente ley [...]”.

<sup>9</sup> De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1266 de 2008, la Fuente de la información es aquella “persona, entidad u organización que recibe o conoce datos personales de los titulares de la información, en virtud de una relación comercial o de servicio o de cualquier otra índole y que, en razón de autorización legal o del titular, suministra esos datos a un operador de información, el que a su vez los entregará al usuario final [...]”.



Sentencia Tutela  
Radicación: 11-001-40-88-038-2021-035 00  
ACCIONANTE: PAULA ANDREA MORALES GONZALEZ  
ACCIONADO: SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTA  
Derechos Fundamentales: Petición.

*que se ordene la corrección, actualización o retiro de datos personales, o para que se inicie una investigación administrativa por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1266 de 2008 (artículo 17); y,*

**(iii) Acudir a los mecanismos judiciales que el ordenamiento jurídico establece para efectos de debatir lo concerniente a la obligación reportada como incumplida, sin perjuicio de que pueda ejercerse la acción de tutela para solicitar el amparo del derecho fundamental al habeas data, en los términos del artículo 16 de la ley en cuestión:**

*“6. Sin perjuicio del ejercicio de la acción de tutela para amparar el derecho fundamental del hábeas data, en caso que el titular no se encuentre satisfecho con la respuesta a la petición, podrá recurrir al proceso judicial correspondiente dentro de los términos legales pertinentes para debatir lo relacionado con la obligación reportada como incumplida. La demanda deberá ser interpuesta contra la fuente de la información la cual, una vez notificada de la misma, procederá a informar al operador dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, de forma que se pueda dar cumplimiento a la obligación de incluir la leyenda que diga ‘información en discusión judicial’ y la naturaleza de la misma dentro del registro individual, lo cual deberá hacer el operador dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a haber recibido la información de la fuente y por todo el tiempo que tome obtener un fallo en firme. Igual procedimiento deberá seguirse en caso que la fuente inicie un proceso judicial contra el titular de la información, referente a la obligación reportada como incumplida, y este proponga excepciones de mérito.”*

**Como se observa, de manera particular y en virtud de lo dispuesto en la Ley 1266 de 2008, el titular de la información cuenta con distintas alternativas a fin de solicitar la protección de los derechos que estima conculcados.**

*No obstante, la ley estatutaria deja a salvo la posibilidad de que se acuda a la acción de tutela para solicitar la protección del derecho fundamental al habeas data, tema al que ya se refería de antaño el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”, así:*

*“ARTICULO 42. PROCEDENCIA. La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos:*

*[...] 6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del hábeas data, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución.”*

**A partir del contenido normativo de esta disposición, la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional ha señalado que, en estos casos, es presupuesto fundamental para el ejercicio de la acción de tutela que el afectado haya solicitado la aclaración, corrección, rectificación o actualización del dato o de la información que considera errónea, de manera previa a la interposición del mecanismo de amparo constitucional:**

*“[E]l derecho fundamental de hábeas data, exige que se haya agotado el requisito de procedibilidad, consistente en que el actor haya hecho solicitud previa a la entidad correspondiente, para corregir, aclarar, rectificar o actualizar el dato o la información que tiene sobre él, pues así se desprende del contenido del artículo 42,*





Sentencia Tutela  
Radicación: 11-001-40-88-038-2021-035 00  
ACCIONANTE: PAULA ANDREA MORALES GONZALEZ  
ACCIONADO: SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTA  
Derechos Fundamentales: Petición.

*numeral 6 del decreto 2591 de 1991, que regula la procedencia de la acción de tutela contra particulares”.*<sup>10</sup>

Esta solicitud, según también lo ha precisado la jurisprudencia constitucional, debe haber sido formulada ante la entidad fuente de la información, es decir, frente a quien efectúa el reporte del dato negativo, con el fin de que se le brinde a ella la oportunidad de verificar directamente la situación y, de ser lo indicado, de adoptar las medidas que correspondan.

Si formulada esa solicitud la fuente de la información insiste en el reporte negativo, la acción de tutela será procedente en aras de determinar si en el caso concreto se ha presentado una vulneración o no del derecho fundamental al habeas data del titular.

#### **4.5.3 Procedencia de la acción de tutela para la protección del debido proceso:**

Respecto una posible vulneración de el derecho al debido proceso en actuaciones administrativas, la corte Constitucional en sentencia T- 545 de 2009 señaló:

*“De conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política y con la reiterada jurisprudencia de esta Corporación, el derecho al debido proceso es garantía y a la vez principio rector de todas las actuaciones judiciales y administrativas del Estado. En consecuencia, en el momento en que el Estado pretenda comprometer o privar a alguien de un bien jurídico no puede hacerlo sacrificando o suspendiendo el derecho fundamental al debido proceso”.*<sup>11</sup>

*De acuerdo a lo expuesto, se ha entendido que el debido proceso administrativo, se convierte en una manifestación del principio de legalidad, conforme al cual toda competencia ejercida por las autoridades públicas debe estar previamente establecida en la ley, como también las funciones que les corresponden cumplir y los trámites a seguir antes de adoptar una determinada decisión (C.P. arts. 4° y 122). En esta medida, las autoridades administrativas únicamente pueden actuar dentro de los límites señalados por el ordenamiento jurídico.*

*En cuanto al alcance constitucional del derecho al debido proceso administrativo, la Corte ha dicho que este derecho es ante todo un derecho subjetivo, es decir, que corresponde a las personas interesadas en una decisión administrativa, exigir que la adopción de la misma se someta a un proceso dentro del cual se asegure la vigencia de los derechos constitucionales de contradicción, impugnación y publicidad. En este sentido, el debido proceso se ejerce durante la actuación administrativa que lleva a la adopción final de una decisión, y también durante la fase posterior de comunicación e impugnación de la misma”.*

Frente a los aspectos fundamentales a tener en cuenta, para el debido ejercicio de la acción de tutela, en tratándose de procesos contravencionales por infracciones de tránsito, y de cara al problema jurídico planteado, se advierte que tendría eficacia ante el

<sup>10</sup> Sentencia T-727 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Además, a este mismo asunto se han referido las sentencias T-131 de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara; T-857 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-467 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y T-284 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

<sup>11</sup> De acuerdo con la Sentencia T-1263 (M. P. Jaime Córdoba Triviño) “(...) el derecho al debido proceso no solo constituye una garantía infranqueable para todo acto en el que se pretenda -legítimamente- imponer sanciones, cargas o castigos, sino que también se constituye como un límite al abuso del poder de sancionar”.



Sentencia Tutela  
Radicación: 11-001-40-88-038-2021-035 00  
ACCIONANTE: PAULA ANDREA MORALES GONZALEZ  
ACCIONADO: SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTA  
Derechos Fundamentales: Petición.

cumplimiento de los presupuestos inmediatos, urgentes de causarse un perjuicio irremediable, que ostente el carácter subsidiario de la acción de tutela, es decir que no se cuente con otros mecanismos de defensa judicial, o que los existentes no sean idóneos y adecuados para la debida protección de los derechos invocados, de lo contrario, en caso de no concurrir alguno de los citados aspectos, el amparo por vía excepcional es improcedente.

Veamos cómo a través de la interpretación constitucional, se ha dejado clarificado la improcedencia de la acción de tutela ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial, entre ellas, el criterio de autoridad en sentencia T-087 de 2006, M. P. Clara Inés Vargas Hernández, en los siguientes términos:

*“Así las cosas la Corte ha de insistir en que ‘el primer llamado a proteger los derechos constitucionales no es el juez de tutela, sino el ordinario. La tutela está reservada para enfrentar la absoluta inoperancia de los distintos mecanismos dispuestos para la protección de los derechos de las personas, no para suplirlos. De otra manera tendría que aceptarse que, más temprano que tarde, la acción de tutela perdería completamente su eficacia’. Es necesario en efecto evitar así darle a la acción de tutela ‘un enfoque y alcance equivocados, particularmente en lo que tiene que ver con los criterios jurídicos de procedibilidad, los cuales atendiendo a lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política y 6º del Decreto 2591 de 1991, determinan el carácter eminentemente subsidiario de este mecanismo de defensa judicial’.*<sup>12</sup> (Subraya la Sala).”

Medios de defensa que resultan idóneos, como así lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional:

*“En términos normativos y de la jurisprudencia, la acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones creadas por actos u omisiones que impliquen vulneración o amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces, para lograr la protección del derecho presuntamente amenazado.*

*“Tal como lo reconoció el juez de primera instancia, en el presente asunto nos encontramos frente a unos actos administrativos, amparados por la presunción de legalidad y al existir desacuerdo con los mismos, la preceptiva contenciosa vigente tiene previsto los mecanismos y los jueces competentes para que tales actos, si así se ameritare, sean retirados del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, si la legalidad de los actos acusados no ha sido cuestionada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no es la tutela el medio establecido para reclamar pretensiones que contra tal normatividad pudieren surgir.*

*“De otro lado, en el presente asunto no se configura el perjuicio irremediable, porque de promoverse la correspondiente acción ante la jurisdicción contencioso administrativa, el peticionario podría obtener la suspensión provisional de los actos censurados sin perjuicio de la eventual nulidad. De tal forma, resulta improcedente conceder el amparo, al haberse podido acudir a otro mecanismo de defensa judicial considerado eficaz para reclamar ante la jurisdicción especializada, como lo ha*

<sup>12</sup> Sentencia T-069 de 2001.



Sentencia Tutela  
Radicación: 11-001-40-88-038-2021-035 00  
ACCIONANTE: PAULA ANDREA MORALES GONZALEZ  
ACCIONADO: SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTA  
Derechos Fundamentales: Petición.

*reiterado esta corporación:*

*“... la suspensión provisional resulta ser un trámite pronto y por lo mismo no menos eficaz que la vía de la tutela, sin que sea dable compartir los criterios expuestos a lo largo del líbello, en el sentido de admitir la viabilidad de la tutela y su mayor eficacia, por razones de tiempo, frente a la demora de los procesos ordinarios, pues ello daría lugar a la extinción de estos, si se pudiere escoger alternativamente y por esa circunstancia, entre el juez de tutela y el juez ordinario para la definición apremiante de los derechos reclamados, lo que desde luego desnaturaliza la verdadera finalidad constitucional encaminada a la protección de los mismos, previo el cumplimiento de los presupuestos requeridos.”<sup>13</sup>*

Ahora, frente al procedimiento idóneo que compete a este tipo de infracciones de tránsito y pretensiones del actor, corresponde al contravencional y de cobro coactivo, y cumplidos los mismos conforme a la normatividad aplicable, lo procedente es la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

De acuerdo con lo expuesto, la Corte Constitucional en Sentencia T- 616 de 2006, estimó necesario transcribir algunos artículos de la ley 769 de 2002, mediante los cuales se reguló el trámite del proceso contravencional por infracciones de tránsito.

*ARTÍCULO 134. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Los organismos de tránsito conocerán de las faltas ocurridas dentro del territorio de su jurisdicción, así: Las inspecciones de tránsito o quienes hagan sus veces en única instancia de las infracciones sancionadas con multas de hasta veinte (20) salarios, y en primera instancia de las infracciones sancionadas con multas superiores a veinte (20) salarios mínimos diarios legales vigentes o las sancionadas con suspensión o cancelación de la licencia para conducir, siendo la segunda instancia su superior jerárquico.*

*PARÁGRAFO. Los daños y perjuicios de mayor y menor cuantía sólo pueden ser conocidos por los jueces civiles de acuerdo a su competencia.*

*ARTÍCULO 135. PROCEDIMIENTO. Ante la comisión de una contravención, la autoridad de tránsito debe seguir el procedimiento siguiente para imponer el comparendo:*

*Ordenará detener la marcha del vehículo y le extenderá al conductor la orden de comparendo en la que ordenará al infractor presentarse ante la autoridad de tránsito competente dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. Al conductor se le entregará copia de la orden de comparendo.*

*Si el contraventor no compareciere sin justa causa comprobada en este tiempo, la multa será aumentada hasta por el doble de su valor, en cuyo caso deberá presentarse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la infracción.*

*La orden de comparendo deberá estar firmada por el conductor, siempre y cuando ello sea posible. Si el conductor se niega a firmar o a presentar la licencia, firmará por él un testigo. Contra el informe del agente de tránsito firmado por un testigo solamente procede la tacha de falsedad.*

<sup>13</sup> Sentencia T-533 de 1998.



Sentencia Tutela  
Radicación: 11-001-40-88-038-2021-035 00  
ACCIONANTE: PAULA ANDREA MORALES GONZALEZ  
ACCIONADO: SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTA  
Derechos Fundamentales: Petición.

*El Ministerio de Transporte determinará las características del formulario de comparendo único nacional, así como su sistema de reparto. En éste se indicará al conductor que tendrá derecho a nombrar un apoderado si así lo desea y que en la audiencia, para la que se le cite, se decretarán o practicarán las pruebas que solicite. El comparendo deberá además proveer el espacio para consignar la dirección del inculpado o del testigo que lo haya suscrito por éste (...)*

**ARTÍCULO 139. NOTIFICACIÓN.** *La notificación de las providencias que se dicten dentro del proceso se hará en estrados.*

**ARTÍCULO 140. COBRO COACTIVO.** *Los organismos de tránsito podrán hacer efectivas las multas por razón de las infracciones a este código, a través de la jurisdicción coactiva, con arreglo a lo que sobre ejecuciones fiscales establezca el Código de Procedimiento Civil. En todo caso será procedente la inmovilización del vehículo o preferiblemente la retención de la licencia de conducción si pasados treinta (30) días de la imposición de la multa, ésta no haya sido debidamente cancelada. Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante [Sentencia C-799 de 2003](#)*

**ARTÍCULO 142. RECURSOS.** *Contra las providencias que se dicten dentro del proceso procederán los recursos de reposición y apelación.*

*El recurso de reposición procede contra los autos ante el mismo funcionario y deberá interponerse y sustentarse en la propia audiencia en la que se pronuncie.*

*El recurso de apelación procede sólo contra las resoluciones que pongan fin a la primera instancia y deberá interponerse oralmente y sustentarse en la audiencia en que se profiera.*

*Toda providencia queda en firme cuando vencido el término de su ejecutoria, no se ha interpuesto recurso alguno o éste ha sido negado.*

Así, de las normas pertinentes del C.N.T.T., se desprende que el proceso contravencional por infracciones de tránsito, está compuesto por cuatro etapas fundamentales: la orden de comparendo, la presentación del inculpado en los términos dispuestos por la ley, la audiencia de pruebas y alegatos y la audiencia de fallo.

#### **4.5. DEL CASO CONCRETO.**

El peticionario interpone acción de tutela contra la entidad accionada, para obtener amparo tutelar de sus derechos fundamentales de petición, habeas data, buen nombre y trabajo, que considera están siendo amenazados o vulnerados por dicha entidad, al no responder claramente y de fondo la solicitud de descargue de los comparendos impuestos por foto multas.

Conforme a lo anterior, debe el Despacho abordar lo relacionado a la presunta afectación de los derechos fundamentales cuyo amparo depreca el actor.

#### **Frente Al Derecho De petición**



Sentencia Tutela  
Radicación: 11-001-40-88-038-2021-035 00  
ACCIONANTE: PAULA ANDREA MORALES GONZALEZ  
ACCIONADO: SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTA  
Derechos Fundamentales: Petición.

El accionado por medio del radicado 20214210707651 del 11 de febrero de 2021 enviado al correo electrónico [autoynegociosvalle@gmail.com](mailto:autoynegociosvalle@gmail.com), acreditó haber dado respuesta clara y de fondo ante las pretensiones del accionante, de esa manera, se concluye que por parte de la accionada y llamada a dar la respuesta al derecho de petición, cumplió dentro del trámite de tutela, independientemente si la misma es favorable o desfavorable, aclarando que la satisfacción del derecho de petición no se traduce necesariamente en una decisión positiva a los intereses del peticionario, por ello, no puede el juez constitucional imponer a la autoridad accionada la obligación de responder en un sentido determinado, pues ello desborda el alcance del mecanismo subsidiario de la acción de tutela.

En esas condiciones, para el Despacho es claro que en este momento cesó la vulneración del derecho fundamental de petición, por cuanto una de las causas que dio lugar a la presente acción de tutela se encuentra superada, atendiendo el material probatorio allegado.

Por tanto, ha de declararse el fenómeno que la Corte Constitucional ha llamado Carencia Actual de Objeto:

*“Es claro que sí la acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva de los derechos fundamentales conculcados o amenazados, la desaparición de los supuestos de hecho en los cuales se fundó la acción – cesación de la conducta violatoria, por haber dejado de tener vigencia o aplicación el acto en el que consistía el desconocimiento del derecho, o por haberse realizado el acto cuya ausencia representaba la vulneración del mismo- o la muerte del accionante cuando la orden solicitada tuviera directa relación con la defensa del derecho a la vida y los derechos a él conexos, hace que se diluya el motivo constitucional en que se basaba la petición elevada conforme a las prescripciones del artículo 86 de la Constitución Nacional y disposiciones reglamentarias. El fenómeno descrito tiene lugar, entonces, cuando el cambio de circunstancias sobreviene antes de dictarse el fallo de primer grado o antes de proferirse el de segundo o la revisión eventual por parte de la Corte Constitucional y, en realidad, ningún objeto tiene en tales casos la determinación judicial de impartir una orden, pues en el evento de adoptarse ésta, caería en el vacío por sustracción de materia. (Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-033 de 1994. Corte Constitucional. Sentencia T-143 de 1994).*

Expuesto lo anterior, la acción de tutela ha perdido su razón de ser al haber desaparecido las situaciones de hecho que la motivaron, y por ende, las causas de la presunta vulneración de los derechos, motivo por el cual, los objetivos perseguidos en la acción de tutela se encuentran satisfechos.

Por lo anterior, y ante la carencia de objeto, por haberse superado la situación de hecho frente al derecho de petición de fecha 25 de septiembre de 2020, se declarará la improcedencia de la acción de tutela.

#### **Frente Al Derecho De debido proceso afectado por una indebida notificación**

Ahora, respecto del trámite de notificación del proceso de cobro coactivo, se verifica de la documentación aportada por la SECRETARIA DE MOVILIDAD, una vez se presentaron las infracciones el accionante conoció de las mismas, para los comparendos 11001000000027533956 de 07/30/2020, 11001000000027532124 de 07/23/2020, adelantó el procedimiento conforme lo dispone la Ley 1843 de 2017 y el comparendo fue remitido



Sentencia Tutela  
Radicación: 11-001-40-88-038-2021-035 00  
ACCIONANTE: PAULA ANDREA MORALES GONZALEZ  
ACCIONADO: SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTA  
Derechos Fundamentales: Petición.

dentro de los 13 días que establece la ley 1843 de 2017 art 8 en concordancia con la resolución 718 de 2018 art 12 por medio de empresa de correspondencia al titular del vehículo automotor, a la dirección que tenía registrada ante RUNT la cual es responsabilidad de los usuarios mantener actualizada, siendo devuelta por la empresa 472 por la causal no existe la dirección.

Formulario de entrega de mensajería con los siguientes datos:

- Remitente:** Dirección: Calle 19 # 37 - 35, Ciudad: BOGOTÁ D.C., Teléfono: 2649400 EXT 8370, Código Postal: 111811802.
- Destinatario:** Nombre: Paula Andrea Morales González, Dirección: Calle 19 # 37 - 35, Ciudad: BOGOTÁ D.C., Teléfono: 2649400 EXT 8370, Código Postal: 111811802.
- Fecha de entrega:** 28/08/2020
- Horario de entrega:** 11:11
- Identificación:** YG259119442CD
- Observaciones:** COMPARENDO
- Destinatario:** Andres Ceferrino

Al no ser notificado personalmente, se procedió, con el siguiente medio de notificación, que es el AVISO, el cual se publicó en la página web [www.movilidadbogota.gov.co](http://www.movilidadbogota.gov.co) mediante el procedimiento establecido en el Art 69 Inc. 2 de la ley 1437 de 2011 con resolución de Aviso No. 152 DEL 2020-08-21 NOTIFICADO 28/08/2020 Y 152 DEL 2020-08-21 NOTIFICADO 28/08/2020.

Para el comparendo 1100100000016071140 de 03 de mayo de 2017, la accionada adelantó el procedimiento con respeto al debido proceso, remitiéndose a la dirección registrada del último propietario del vehículo, dentro de los 3 días a la dirección del titular del vehículo automotor, pero la empresa de correspondencia, mediante guía de entrega informó como causal de devolución NO EXISTE.

Formulario de Mensajería con los siguientes datos:

- Remitente:** COMUNICACION SECRETARIA DISTRITAL DE BOGOTÁ, D.C., Dirección: BOGOTÁ, D.C., Teléfono: 499699061.
- Destinatario:** PAULA ANDREA MORALES GONZALEZ, Dirección: CH 263 HITUNGA SUR, Ciudad: BOGOTÁ, D.C., Teléfono: 8612196.
- Fecha y hora de recepción:** 4/05/2017 11:05:17
- Proceso:** 11-05-17
- Motivos de devolución:** 5. DIRECCIÓN ERRADA (marcado con X)
- Destinatario desconocido:** 1 (marcado con X)

Al no ser notificado personalmente, se procedió, con el siguiente medio de notificación, que es el AVISO el cual se publicó en la página web [www.movilidadbogota.gov.co](http://www.movilidadbogota.gov.co) mediante el procedimiento establecido en el Art 69 Inc. 2 de la ley 1437 de 2011 con resolución de Aviso No. 058 DEL 2017- 05-30 NOTIFICADO 06/06/2017.

En cuanto a los órdenes de comparendo 11001000000025044367 de 09/25/2019 y 11001000000016129557 de 05/09/2017 se expidió resolución de revocatoria, 2623 de 2020





Sentencia Tutela  
Radicación: 11-001-40-88-038-2021-035 00  
ACCIONANTE: PAULA ANDREA MORALES GONZALEZ  
ACCIONADO: SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTA  
Derechos Fundamentales: Petición.

respecto de la orden de comparendo 11001000000025044367 de 09/25/2019 de lo cual se informa que fue notificada personalmente el 17 de noviembre de 2020, y como pudo evidenciarlo en la parte resolutive del acto administrativo, indican que se restablecieron los términos de acuerdo con lo indicado por la norma, quedando en libertad de realizar lo dispuesto en el artículo 136 del código Nacional de Transito Terrestre, impugnando la orden de comparendo o cancelando con el respectivo descuento y la realización del curso pedagógico.

En cuanto a la orden de comparendo 1100100000016129557, señaló la accionada, que el mismo se encuentra en estado REVOCADO.

En cuanto la orden de comparendo 11001000000021452104 se le informó que la misma entró en estudio de revocatoria directa, para lo cual están establecidos dos meses de acuerdo con lo indicado por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su artículo 95 que indica “Las solicitudes de revocación directa deberán ser resueltas por la autoridad competente dentro de los dos (2) meses siguientes a la presentación de la solicitud.”, por lo que una vez realizado dicho estudio, tendrá respuesta definitiva a su petición.

De esa manera, se acreditó que tanto la accionada como la vinculada cumplieron los parámetros de la Ley, respecto del trámite de notificación del proceso de cobro coactivo, utilizando los medios contemplados en el procedimiento contravencional y acorde con el Código Contencioso Administrativo, esto es, a través de los medios reportados ante las autoridades de tránsito, teniendo en cuenta que la accionante no acreditó, ni mencionó en el escrito de tutela, o ante la accionada, así como el correo electrónico, u otro medio equivalente, para eventualmente surtir ese tipo notificaciones, como lo refiere el artículo 8 de la Ley 1843 de 2017.

De lo anterior, permite concluir que los derechos fundamentales al debido proceso frente a notificación del proceso coactivo, invocados por el actor, quedaron a salvo, cuando se desarrolló el procedimiento contravencional conforme a la ley, pues además de haberse demostrado que dicho trámite sí se cumplió a cabalidad, el accionante tenía igualmente la corresponsabilidad de mantener actualizada su dirección de residencia en el RUNT.

De otro lado, precisa este Despacho que, al no evidenciarse la existencia de un perjuicio irremediable, se hace improcedente acceder al amparo por vía de tutela, como quiera que el accionante no demostró su ocurrencia, lo cual hubiese permitido, siquiera transitoriamente, la intervención del Juez de tutela en otras áreas del derecho, tal como lo ha expuesto puntualmente la Corte:

*“Para que la acción de tutela sea procedente como mecanismo principal, el demandante debe acreditar que, o no tiene a su disposición otros medios de defensa judicial, o teniéndolos, éstos, no resultan idóneos y eficaces para lograr la protección de los derechos fundamentales presuntamente conculcados.”<sup>14</sup>*

*“De lo anterior se concluye que, “por su propia teleología, la acción de tutela reviste un carácter extraordinario, que antepone el respeto por las jurisdicciones ordinarias y especiales, así como por sus propias acciones, procedimientos, instancias y recursos a*

<sup>14</sup> Sentencia T-235 de 2010.





Sentencia Tutela  
Radicación: 11-001-40-88-038-2021-035 00  
ACCIONANTE: PAULA ANDREA MORALES GONZALEZ  
ACCIONADO: SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTA  
Derechos Fundamentales: Petición.

*fin de que la acción constitucional no usurpe las competencias de otras autoridades jurisdiccionales.”<sup>15</sup>*

De otro lado, en lo que tiene que ver con el valor reportado en las páginas del SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN SOBRE MULTAS Y SANCIONES POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO-SIMIT y REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRANSITO-RUNT se tiene que esta publicaciones son legítimas derivadas del comparendo impuesto a la accionante y que a la fecha se encuentra sin cancelar, y si la señora PAULA ANDREA MORALES GONZALEZ considera que es discutible su legalidad deberá ser el Juez Competente, quien se pronuncie al respecto mediante un fallo en ese sentido, como se indicó anteriormente.

Finalmente, frente al derecho al derecho al trabajo, la accionante dentro de los elementos materiales probatorios no acreditó que su profesión fuese conductora o si quiera que por medio de la licencia de conducción, de ello dependiera su actividad laboral familiar o personal, circunstancia que se debe acreditar dentro del presente tramite, no solo limitarse a mencionarlo, por lo que se negará el amparo del derecho fundamental invocado en la acción de tutela.

Frente a la entidad vinculada **REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRANSITO-RUNT**, se advierte que no es la llamada a garantizar directamente los derechos del actor, razón por la cual se le desvincula del presente trámite.

## 5. DECISIÓN:

Por lo expuesto, el Juzgado 38 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

### R E S U E L V E:

- PRIMERO:** **DECLARAR IMPROCEDENTE** la presente acción de tutela interpuesta por la señora **PAULA ANDREA MORALES GONZALEZ** contra la **SECRETARIA DE MOVILIDAD DE DISTRITAL DE BOGOTÁ**, en relación con el derecho de petición, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
- SEGUNDO:** **NEGAR** el amparo constitucional a los derechos del debido proceso, habeas data y trabajo, invocados en la acción de tutela presenta por la señora **PAULA ANDREA MORALES GONZALEZ** contra la **SECRETARIA DE MOVILIDAD DE DISTRITAL DE BOGOTÁ**, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
- TERCERO:** **DESVINCULAR**, del trámite de tutela al **REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO (RUNT)** por las razones expuestas en esta decisión.
- CUARTO:** De conformidad con los artículos 30, 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991, notifíquese en legal forma la presente decisión y una vez cumplido éste trámite, si dentro del término de los tres días siguientes, fuere impugnada,

<sup>15</sup> Sentencia T-304 de 2009.





Sentencia Tutela  
Radicación: 11-001-40-88-038-2021-035 00  
ACCIONANTE: PAULA ANDREA MORALES GONZALEZ  
ACCIONADO: SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTA  
Derechos Fundamentales: Petición.

remítase al Superior funcional. En su defecto, se remitirá de manera inmediata a la **Corte Constitucional**, para su eventual revisión.

**QUINTO:** Contra el presente fallo procede el recurso de impugnación, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato, como lo estipula el artículo 31 ídem.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**

**LIGIA AYDEE LASSO BERNAL**

**JUEZ**

**Firmado Por:**

**LIGIA AYDEE LASSO BERNAL**

**JUEZ**

**JUEZ - JUZGADO 038 MUNICIPAL PENAL CONTROL DE GARANTIAS DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**2a4399e09f995eb639cb87480a79c3c35166faaafe0f2237ca9d5aab80fcd22**

Documento generado en 23/02/2021 06:20:31 AM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**